



## JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACTOR: \*\*\*\*\*<sub>1</sub>

**AUTORIDAD DEMANDADA: TITULAR DE LA FISCALÍA DE CONTRALORÍA Y VISITADURÍA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

**EXPEDIENTE 896/2020 SS**

Tijuana, Baja California, a **cuatro de enero de dos mil veintitrés.**

**SENTENCIA DEFINITIVA**, que se dicta en los autos del juicio contencioso administrativo **896/2020 SS**, promovido por \*\*\*\*\*<sub>1</sub>, en contra de la autoridad **TITULAR DE LA FISCALÍA DE CONTRALORÍA Y VISITADURÍA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**, en la que se declara la nulidad de la resolución impugnada y se condena a la autoridad demandada a dejarla sin efectos, con sus consecuencias legales y conforme los lineamientos establecidos en el propio fallo; bajo los siguientes:

### ANTECEDENTES:

**1.-** Que ante esta Sala ahora Juzgado Segundo compareció \*\*\*\*\*<sub>1</sub>, instaurando demanda en contra de la autoridad **TITULAR DE LA FISCALÍA DE CONTRALORÍA Y VISITADURÍA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**, señalando como acto impugnado **la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veinte**, dictada por la Titular de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía del Estado de Baja California, dentro del procedimiento administrativo número \*\*\*\*\*<sub>2</sub>, por medio de la cual resuelve que incurrió en la causal de responsabilidad señalada en la fracción VII del artículo 40 en relación con el artículo 25 fracción II, que se relaciona con el requisito de permanencia indicado en los incisos b) y f) del artículo 24, todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, determina grave la responsabilidad e impone la sanción de remoción del cargo que venía desempeñando como perito adscrito a la Fiscalía citada, conforme la fracción IV del artículo 43 del referido ordenamiento, por no haber aprobado los procesos de evaluación de control de confianza.

**2.-** El demandante expresó como los hechos que sustentan su demanda, e hizo valer motivos de inconformidad, que por economía procesal se tienen como si a la letra se reprodujeran en el presente fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o. J/129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 599 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, cuyo rubro es: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.**

**3.-** Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda ordenándose emplazar a la autoridad demandada, quien dio contestación a la misma mediante escrito recibido el ocho de febrero de dos mil veintiuno.

**4.-** Seguido el juicio por todos sus trámites, conforme el acuerdo de Pleno de cinco de junio de dos mil veinte, se tuvo por desahogadas las

pruebas ofrecidas por las partes, y se apertura la etapa de alegatos; por lo que transcurrido el plazo de cinco días concedido a las partes, mediante auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se cito a las partes a oír resolución, lo que se hace en los siguientes términos:

## CONSIDERANDOS

**I.- Competencia.-** Este Tribunal es competente para conocer del presente juicio en razón de la materia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 fracciones I y IX de la Ley del Tribunal del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, toda vez que el acto impugnado es de naturaleza administrativa, relacionada con una controversia entre un miembro de una corporación policial en su carácter de Perito y la Administración Pública Estatal con motivo de la prestación de sus servicios.

Asimismo, es competente por territorio, en virtud de que lo promueve un particular, quien señala un domicilio en la ciudad de Tijuana, Baja California, el cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial de esta Sala ahora Juzgado Segundo que fue fijada por acuerdos del Pleno de este Tribunal, en sesión de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto por los diversos Artículos 17 fracción VI, 18 fracción X, 21 y 22 de la citada Ley.

Por otra parte, es menester precisar que conforme el Acuerdo del Pleno del Tribunal de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el que se toman diversas determinaciones con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, destacan los puntos SEGUNDO Y CUARTO, según los cuales la denominación de los órganos de primera instancia que correspondían a la Primera Sala, Segunda Sala, Tercera Sala y Sala Auxiliar, será la de Juzgado Primero con residencia en la ciudad de Mexicali, **Juzgado Segundo con residencia en la ciudad de Tijuana**, Juzgado Tercero con residencia en la ciudad de Ensenada y Juzgado Auxiliar con residencia en la ciudad de Tijuana y a partir del seis de agosto de dos mil veintiuno Juzgado Cuarto, respectivamente; además de que los Magistrados de Sala que a la fecha se encuentren en el ejercicio de sus cargos fungirán como Titulares de los Juzgados de Primera Instancia de las Salas a las que estaban adscritos. De tal manera que esta Segunda Sala se denomina ahora Juzgado Segundo y la suscrita Magistrada de Sala en funciones de titular del Juzgado Segundo. De lo que se deja constancia.

Por otra parte, conforme el transitorio TERCERO de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, con las salvedades que el propio artículo transitorio señala.

**II.- Existencia del acto impugnado.-** El acto impugnado consiste en **la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte**, dictada por la Titular de la Fiscalía de la Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California dentro del procedimiento administrativo de separación definitiva \*\*\*\*\*<sup>2</sup>, por medio de la cual resuelve la separación definitiva del actor en el cargo que venía

desempeñando como miembro policiaco, fue exhibida en copia simple por la parte actora y en copia certificada por la autoridad demandada como parte del expediente administrativo identificado con el mismo número que en copia certificada obra agregado en autos, instrumentales públicas que de conformidad con lo previsto en los artículos 322 fracción V, 323 y 405 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria al procedimiento contencioso administrativo, según los numerales 30, tercer párrafo y 79, ambos de la Ley del Tribunal, les asiste valor probatorio pleno para tener por demostrada su existencia y contenido.

**III.- Procedencia.-** La resolución impugnada en este Juicio, fue emitida por la Titular de la Fiscalía de la Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

La autoridad demandada no invoca causal de improcedencia alguna, y esta resolutoria de primera instancia no advierte oficiosamente que se actualice alguna de las previstas en el artículo 40, de la Ley del Tribunal, por lo que es procedente examinar el fondo del asunto.

**IV.- Análisis.** El demandante plantea diversos motivos de inconformidad, la que examinará esta resolutoria atendiendo a lo dispuesto por el artículo 83, último párrafo de la Ley del Tribunal, examinará cuestiones que tienen relación con el fondo del asunto, y que redundan en un mayor beneficio para el demandante, resolviéndose en definitiva la litis.

Es aplicable la siguiente jurisprudencia:

**CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).**

El artículo 17 constitucional consagra la garantía de acceso a la impartición de justicia, la cual se encuentra encaminada a asegurar que las autoridades -órganos judiciales o materialmente jurisdiccionales- lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de los principios que consagra dicha garantía es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la existencia de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las resoluciones: el de congruencia y el de exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no existe una disposición expresa que establezca el orden en que deben analizarse los conceptos de anulación, también lo es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos de impugnación en que descansa la pretensión anulatoria del actor, y preferentemente de los orientados a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, ya que de resultar fundados se producirá un mayor beneficio jurídico para el actor, pues se eliminarán en su totalidad los efectos del acto administrativo, con lo que se respeta la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en particular, el principio de completitud que ésta encierra.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A.T. J/9

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXX, Agosto de 2009. Pág. 1275. Tesis de Jurisprudencia.

En sus motivos de inconformidad, entre otras cosas el demandante expresa, que la resolución impugnada es contraria a derecho, en razón de que no se acredita con pruebas aptas, suficientes

se imputan las imputaciones en su contra, por lo que considera que fue removido del cargo sin justificación fáctica y probatoria.

**Es necesario exponer primero los antecedentes del caso:**

La parte actora tiene el carácter de perito adscrito a la ahora Fiscalía General del Estado, según nombramiento otorgado en fecha veintiséis de marzo de dos mil siete, obrante a fojas 187 de autos. Documental pública que tiene pleno valor probatorio y eficacia demostrativa plena, para justificar a partir de cuando tiene el carácter de perito. Sirve de fundamento lo dispuesto por los artículos 322, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado supletoriamente en la materia, atento lo disponen los artículos 30 párrafos primer y tercero, así como 79, de la Ley del Tribunal.

El treinta de mayo de dos mil dieciocho se dictó acuerdo de inicio de procedimiento \*\*\*\*\*2 en contra de la parte actora por presumir que incurrió en causal de responsabilidad administrativa señalada en la fracción VII del artículo 40 en relación directa con la fracción XVI del artículo 41 ambos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, específicamente por cuanto hace al supuesto de obtener y mantener vigente la certificación respectiva, en vinculación con el numeral 25 fracción II que remite al artículo 34, específicamente la fracción II, inciso b, aprobar los procesos de evaluación de control y confianza y de evaluación del desempeño, permanentes, periódicos y obligatorios que establece el Reglamento, y demás disposiciones aplicables y contar con la certificación y registro actualizado conforme las disposiciones legales, 26 y 27 de la citada Ley Orgánica, en armonía con los numerales 1, 5, fracción IX, 56 y 65 segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 186, 187, 188 y tercero transitorio de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Baja California, artículo 15, fracción VI, X, XI, XV, 49 del Reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, por no haber aprobado en la evaluación de confianza que le fue practicada. Fojas 346 a 386 de autos. Obrante en copia certificada.

El treinta de mayo de dos mil dieciocho se notificó mediante cédula de notificación a la parte actora el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo que ordena la citación a la audiencia de ley, fojas 387 a 389 de autos. Obrante en copia certificada.

El diecinueve de junio de dos mil dieciocho se celebró ante la incomparecencia de la parte actora, la audiencia, haciéndose constar que se presumen ciertos los hechos que se le atribuyen, salvo que en su momento procesal se desvirtúen de las pruebas desahogadas y/o de los hechos notorios que resulten; se ordena dar vista para que formule alegatos. Fojas 398 a 400 de autos. Obrante en copia certificada.

El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se dictó acuerdo y se señala fecha para continuar audiencia en su etapa inicial de declaración, ofrecimiento y admisión de pruebas. Fojas 405 a 407 de autos. Obrante en copia certificada.

El doce de julio de dos mil dieciocho se lleva a cabo la audiencia en su etapa de declaración, ofrecimiento y admisión de pruebas. Fojas 412 a 415 de autos. Obrante en copia certificada.

El siete de agosto de dos mil dieciocho se dicta acuerdo sobre la admisión o rechazo de las pruebas ofrecidas por la parte actora. Fojas 426 a 430 de autos. Obrante en copia certificada.

El quince de agosto de dos mil dieciocho se dicta acuerdo sobre la admisión o rechazo de las pruebas pendientes de proveer. Fojas 433 a 438 de autos. Obrante en copia certificada.

El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la perito de la parte actora acepta y protesta el cargo conferido. Fojas 446 a 447 de autos. Obrante en copia certificada.

El ocho de octubre de dos mil dieciocho se recibe dictamen en materia de psicología, fojas 454 a 459 de autos. Obrante en copia certificada.

El ocho de octubre de dos mil dieciocho se ratifica el dictamen en materia de psicología a cargo de la perito Martha Leticia Cruz Ramírez. Fojas 460 a 461 de autos. Obrante en copia certificada.

El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho se recibe en Visitaduría General el oficio \*\*\*\*\*<sup>3</sup> mediante el cual se remite la acreditación \*\*\*\*\*<sup>4</sup>, de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, firmado por la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, en el que remite sobre cerrado y lapidado copia debidamente certificada del expediente que avala el proceso de Evaluación y Control realizado a la parte actora en el año 2013, en su carácter de \*\*\*\*\*<sup>5</sup>. Fojas 470 a 473 de autos. Obrante en copia certificada.

El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, continúa la audiencia administrativa. Fojas 478 a 480 de autos. Obrante en copia certificada.

El cinco de junio de dos mil diecinueve se recibe el escrito de alegato de la parte actora dentro del procedimiento administrativo. Fojas 484 a 485 de autos. Obrante en copia certificada.

El veintiséis de mayo de dos mil veinte se dicta la resolución administrativa materia del presente juicio, que determina la responsabilidad administrativa por perdida de requisitos de permanencia y se impone la sanción de remoción a la parte actora.

Documentales públicas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 322, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, aplicado de manera supletoria atento lo disponen los artículos 30, primer y tercer párrafo, y 79, de la Ley del Tribunal y que tienen la eficacia demostrativa para acreditar la forma como se llevo a cabo el procedimiento administrativo seguido en contra del actor y que culminó con la remoción del cargo, así como los medios convictivos y razonamientos expuestos por la autoridad para concluir que dejó de reunir requisitos de permanencia constitutivos de responsabilidad administrativa, en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.

**Estudio del caso, a partir de los motivos de inconformidad esbozados por la parte actora.**

Expresa que, del contenido de la resolución impugnada, se advierte que su remoción del cargo se sustenta en que no aprobó los exámenes de confianza, que en la resolución ni siquiera se menciona el resultado del reporte final de evaluación, que no existen los exámenes que se dice no aprobó, por lo que desconoce en cuales pruebas se sustenta la autoridad

Que los hechos narrados por la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, en el Reporte Final de Evaluación son afirmaciones subjetivas, aunado a que no existen pruebas que sustenten las afirmaciones de la Directora de dicho Centro.

Refiere que la autoridad Investigadora no solicitó los exámenes de evaluación a los que se sustenta el resultado final, y que no se advierte tampoco cuál o cuáles evaluaciones fueron las que no aprobó, las metodologías utilizadas, sí como sus resultados y sustento.

En relación con los argumentos planteados, **la autoridad demandada** en su escrito de contestación de demanda, sostiene la legalidad de su actuación, manifestando que el documento en que se sustentó la resolución sancionatoria al actor, fue emitido por una autoridad del Centro de Evaluación, Control y Confianza, por lo tanto tiene el carácter de Instrumental Pública, que tal documental es suficiente para tener por probadas las causas que originaron la remoción del cargo, siendo que la conducta imputada fue no aprobar los exámenes de confianza.

Refiere que las probanzas valoradas son suficientes para tener por acreditado que el demandante no aprobó las evaluaciones practicadas y que ello sustenta el Reporte de evaluación integral que refleja los reportes de evaluación psicológica y evaluación poligráfica emitidos por el personal profesional, capacitado y certificado, en el que se practicaron diversas baterías de exámenes y análisis consistentes en evaluación psicológica, evaluación poligráfica, investigación económica, evaluación médica, y evaluación toxicológica, y que culminó con un reporte integral que estableció como resultado único el de no aprobado.

Expone además que el Centro de Evaluación y Control de Confianza se encuentra debidamente certificado y acreditado.

Además de que en cuanto a que no hay pruebas idóneas aptas y suficientes que sirvieran de base, en la resolución se hace un detenido y exhaustivo análisis de los medios de convicción que sirvieron de base para remover al perito, con los cuales se justifica la necesidad de removerlo, según se constata en el informe de autoridad rendido mediante oficio \*\*\*\*\*<sup>3</sup>, emitido por la entonces Directora del referido Centro, consistente en la copia certificada del expediente completo de la evaluación constante de ciento noventa y seis fojas útiles que se contiene en el cuadernillo número \*\*\*\*\*<sup>6</sup>, que se apertura por cuerda separada.

**El motivo de inconformidad planteado por la parte actora resulta fundado.**

Para determinar la existencia de la responsabilidad administrativa conforme el artículo 40 fracción VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, en

delante Ley Orgánica, el cual establece que son causas de responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría, sin perjuicio de las que establezcan las leyes especiales en la materia, el incumplir cualquiera de las obligaciones a que se refiere el siguiente artículo, es decir el artículo 41. En tanto que el artículo 41, de la Ley Orgánica, señala en su fracción XVI obtener y mantener vigente la certificación respectiva. Mientras que el artículo 25 de la Ley Orgánica señala que para ingresar y permanecer deberán satisfacer los requisitos de la fracción II del artículo 24. El referido artículo 24 indica que deben aprobarse los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño, permanentes, periódicos y obligatorios que establezca el reglamento y demás disposiciones aplicables, así como contar con la certificación y registro actualizados conforme a las disposiciones legales aplicables (incisos b y f).

Dichos preceptos son los que sustentan la resolución que determina la remoción de la parte actora, y al respecto es menester efectuar las siguientes precisiones:

La autoridad demandada, en la resolución impugnada, refiere que la remoción del cargo de perito se sustenta en dichos preceptos, basándose para ello en el hecho de que **el demandante no aprobó la evaluación de control de confianza en cuanto a la evaluación psicológica y poligráfica, respectivamente.**

Del contenido de los preceptos legales en comento, se advierte que la autoridad considero que incumplió con sus responsabilidades administrativas al dejar de reunir requisitos de permanencia al no aprobar los exámenes y evaluaciones de psicología y polígrafo, las cuales se encuentran íntimamente ligadas a los procesos de evaluación de control de confianza, para lo cual es necesario analizar en qué consisten estas evaluaciones.

Al efecto, el Reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California dispone en su artículo 34 que los procesos de evaluación, de control de confianza y el de certificación, se conformarán acordes a las normas y procedimientos técnicos establecidos por el Centro Nacional y podrán consistir en las siguientes evaluaciones:

- I.- Evaluación Psicológica;
- II.- Evaluación Médica y Toxicológica;
- III.- Evaluación Poligráfica, e
- IV.- Investigación Socioeconómica.

A su vez, los artículos 36 al 39 establecen el objeto de cada una de las evaluaciones:

**Artículo 36.-** La Evaluación Psicológica a los Aspirantes, tiene por objeto:

- a) Evaluar a través del proceso de aplicación de una batería de pruebas específicas y entrevista profunda, si las características de personalidad, valores, competencias y capacidades del candidato, coinciden con el perfil del puesto vacante, e
- b) Identificar el potencial de desarrollo, áreas de oportunidad del Evaluado y en su caso necesidades de capacitación.

La Evaluación **Psicológica** a los Miembros, Agentes del Ministerio Público, Peritos y Elementos de Apoyo, tiene por objeto:

- a) Identificar factores de éxito en el cumplimiento de funciones, y
- b) Detectar recursos potenciales, vulnerabilidades y áreas de oportunidad en las esferas profesional y personal.

**Artículo 37.-** La Evaluación Médica y Toxicológica, tiene por objeto: Evaluación Médica:

- a) Verificar que el estado de salud e integridad física del Evaluado, permita el cumplimiento de las funciones del puesto, e
- b) Identificar factores de riesgo, en un marco de seguridad personal e institucional.

Evaluación Toxicológica:

- a) Detectar la presencia de drogas ilegales o fármacos que generen efectos adictivos, repercusiones en el sistema nervioso o alteraciones orgánicas.

**Artículo 38.-** La Evaluación Poligráfica en los Aspirantes, tiene por objeto:

- a) Fortalecer niveles de confiabilidad y seguridad, mediante la identificación de candidatos cuyas conductas, principios y valores sean acordes a los institucionales, y
- b) Prevenir riesgos que dañen la operación, seguridad y cumplimiento de objetivos institucionales.

**La Evaluación Poligráfica a** los Miembros, Agentes del Ministerio Público, Peritos y Elementos de Apoyo, tiene por objeto:

- a) Verificar el apego a principios, normas y valores institucionales;
- b) Identificar riesgos que puedan vulnerar el cumplimiento de los objetivos, seguridad e imagen institucional, y
- c) Fortalecer en el personal, los niveles de seguridad, disciplina y doctrina necesarios para la operación y efectividad de las instituciones.

**Artículo 39.-** La Investigación Socioeconómica en los Aspirantes, tiene por objeto:

- a) Verificar la congruencia del estilo de vida del Aspirante con su trayectoria profesional, social, laboral y económica;
- b) Validar la autenticidad de documentos, e
- c) Investigar antecedentes penales, registrales, patrimoniales, administrativos, personales y laborales.

**La Investigación Socioeconómica a** los Miembros, Agentes del Ministerio Público, Peritos y Elementos de Apoyo, tiene por objeto:

- a) Verificar la congruencia entre el nivel de ingreso y situación patrimonial;
- b) Validar la autenticidad de documentos;
- c) Investigar antecedentes penales, registrales, patrimoniales, administrativos, personales y laborales, y
- d) Verificar riesgos en función de la naturaleza del puesto que se desempeñe.

De los preceptos comentados deviene que, a efecto de establecer que un perito (como ocurre en este caso) no cumplió con las obligaciones que la autoridad le imputa como incumplidas o no cumplió con el requisito de permanencia cuya ausencia se le atribuye, es necesario que se acredite plenamente, primero, **cuál o cuáles de las evaluaciones practicadas fueron las que no aprobó, que tipo de pruebas se llevaron a cabo, y en caso de ser pruebas científicas, la descripción de los procesos científicos que se llevaron a cabo, cómo se obtuvieron los resultados correspondientes así como la calidad profesional de quien las practicó y cómo se llegó a la conclusión de que no se aprobó la o las evaluaciones correspondientes.**

Lo anterior, a efecto de que el sujeto al procedimiento, se encuentre en plena aptitud de controvertir el sustento probatorio en que la autoridad funde las imputaciones, en pleno ejercicio de su derecho de audiencia y defensa.

A efecto de resolver la controversia, esta resolutoria de primera instancia procede a analizar los documentos que, como parte del expediente administrativo \*\*\*\*\*2, la autoridad **menciona** en principio en el acuerdo de inicio de procedimiento, específicamente a fojas 372 de autos.

En el referido acuerdo indica la autoridad que el actor fue sometido a una evaluación de control de confianza por dicho Centro para efectos de acreditar su permanencia como perito mediante la evaluación respectiva, y que en todo momento el servidor público

autorizo la práctica de dichas evaluaciones, mediante los siguientes formatos: autorización de evaluación psicológica, autorización de evaluación poligráfica, autorización de evaluación investigación socioeconómica, autorización de evaluación médica examen médico, autorización de evaluación toxicológica "examen toxicológico y químico clínico", visibles en el cuadernillo número \*\*\*\*\*6; formatos en donde le servidor publico impuso su firma y otorgo su mas amplia autorización, y que derivado de esas evaluaciones, el Centro emitió el reporte integral de evaluación que concluyó con un resultado único de no aprobado, al colegirse del informe rendido por la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza mediante oficio numero \*\*\*\*\*3 de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, consultable a fojas 19 a 21 (*estas fojas referidas por la autoridad en su acuerdo*) del expediente que la parte actora obtuvo un NO APROBADO POR EL CUAL NO SE EMITIO CERTIFICADO ALGUNO.

En tanto en la resolución impugnada, consultable a fojas 486 a 576 de autos, la autoridad demandada examina diversas pruebas para llegar a la conclusión de que la parte actora incumplió con sus responsabilidades administrativas al dejar de reunir un requisito de permanencia al no aprobar la evaluación psicológica y poligráfica respectivamente.

Específicamente en la resolución la autoridad examina diversas probanzas, y al referirse a la documental número 5, 5.1., 5.2 y 5.2, fojas 496 a 510 de autos, obrantes en copia certificada, a, a efecto de realizar el análisis de los mismos, consistente en la copia certificada del expediente que avala la evaluación de control y confianza realizada a la parte actora, constante de ciento noventa y seis fojas, remitido bajo oficio \*\*\*\*\*3 de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, signado por la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, en donde la autoridad considera que destaca el reporte de evaluación psicológica (5.1) reporte de evaluación poligráfica (5.2) y reporte de investigación socioeconómica (5.3) de los cuales destacan los factores de riesgo identificados durante la evaluación y que esencialmente reproduce a fojas 497 a 509 de autos.

Conforme dichos reportes de evaluación elaborados por la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza así como el expediente cuaderno \*\*\*\*\*6, que presuntamente avala las evaluaciones practicadas y de las cuales dice la autoridad se deduce que el demandante no aprobó las evaluaciones.

De las constancias aportadas en este Juicio por la autoridad demandada se advierte que no obran en autos ni en el secreto de esta Sala, las que integran el expediente que presuntamente soporta la existencia y resultados de las evaluaciones referidas por la autoridad demandada practicadas al demandante.

La autoridad demandada no exhibió ante esta resolutoria dicha información, a efecto de ser verificada por esta juzgadora de primera instancia, lo cual era necesario atendiendo a que el demandante niega categóricamente la existencia de los exámenes o evaluaciones referidas en el Reporte Final de Evaluación como sustento de la resolución impugnada. No obstante que durante el procedimiento ofreció dos periciales. Circunstancia que se corrobora de la razón levantada por la Oficial de Partes de este órgano de primera instancia, y que la suscrita tiene a la vista, fojas 139 de autos, en donde se lee que

se recibió el ocho de febrero de dos mil veintiuno " Escrito original, 2 fojas de cargo, - expediente queja c/426 f, + 2 C.T., (entregado por correos de México) y una firma ilegible.". A lo que se añade que en la penúltima y última foja del escrito de contestación de demanda la autoridad ofrece como prueba "1.-DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en un juego de copia certificada y dos juegos de copias simples del procedimiento de separación definitiva \*\*\*\*\*<sup>2</sup>, instruido en contra del \*\*\*\*\*<sup>1</sup>. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los motivos de inconformidad de la demanda....3.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- .... TERCERO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas, por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral y desahogadas por su propia y especial naturaleza. ..."; aunado a lo anterior, en la certificación efectuada por la Titular de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría demandada, destaca a fojas 587 que autentica "que la presente copia fotostática, es fiel y exacta de su original que se tuvo a la vista para el cotejo correspondiente, mismas que obran dentro del expediente \*\*\*\*\*<sup>2</sup> y que constan de cuatrocientas veintiséis fojas (426) fojas útiles; levantando la presente para los efectos a que haya lugar."

Sobresale a fojas 179 a 181 de autos, la certificación efectuada por la Titular de la Fiscalía demandada, donde se tiene a la vista el oficio \*\*\*\*\*<sup>3</sup> de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, firmado por la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, en la que destaca lo siguiente: "...3.- se remite copia certificada del reporte integral de la evaluación de control de confianza del \*\*\*\*\*<sup>1</sup>. 5.- Se remite en sobre cerrado y lapidado copias certificadas del expediente de la evaluación de control de confianza que se practicó al \*\*\*\*\*<sup>1</sup>..."

Instrumental de actuaciones que tiene pleno valor probatorio, en términos del artículo 322, fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado supletoriamente en la materia, atento lo dispone el artículo 30 primer y tercer párrafo y 79, ambos de la Ley del Tribunal; que tiene la eficacia para demostrar que la autoridad al momento de contestar la demanda solamente exhibió copia certificada del expediente, sin anexo relativa a los exámenes practicados a la parte actora, lo que además se reafirma con lo señalado en la propia contestación de demanda, en el capítulo denominado de las pruebas, en al referirse a la documental publica consistente en un juego de copia certificada y dos juegos de copias simples del procedimiento de separación definitiva \*\*\*\*\*<sup>2</sup>, instruido en contra de la parte actora. Sin que se aprecie que se acompañe el anexo de referencia.

Sólo se cuenta con la copia certificada del oficio número \*\*\*\*\*<sup>3</sup>, de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, suscrito por el Director de Evaluación de y Control de Confianza del Estado de Baja California, en el cual aparece el nombre del demandante, y diversos datos de su persona, el marco normativo del reporte, así como el nombre completo del evaluado, el resultado no aprobado, motivo de la evaluación, resultado NO APROBADO. Con la observación de que en el centro obra la documentación clasificada como confidencial y reservada.

No obra constancia probatoria que sustente que el demandante efectivamente incumple con los requisitos establecidos por las disposiciones de la materia, ni que "derivado de su evaluación de

control y confianza", factores de riesgo que interfieran o ponga en riesgo el desempeño de sus funciones, para el cumplimiento de objetivos, la imagen de la institución y seguridad institucional... además (foja 101 de autos)... dice la autoridad que "obran diversos medios de prueba que ya han sido analizados y valorados en párrafos anteriores que resultaron eficaces y suficientes para acreditar la causa de responsabilidad consistente en incumplir con su obligación y requisito de obtener y mantener vigente la certificación respectiva que otorga el Centro... esencialmente la documental publica consistente en el oficio numero \*\*\*\*\*3... fue sometido a una evaluación de control y confianza por parte de ese centro de evaluación, obteniendo un resultado NO APROBADO... adminiculado con el informe de la autoridad ... en el cual se informa que el servidor publico ...no aprobó su evaluación de control de confianza y por consecuencia no obtuvo y no se le emitió el certificado respectivo...." así como lo asentado a fojas 104 a 106 de autos y que se tiene por reproducido atendiendo al principio de economía procesal.

La autoridad demandada se pronunció en la resolución impugnada, considerando que el demandante había incumplido con el requisito de permanencia y obligación de aprobar los exámenes de evaluación de control de confianza, y en particular en la parte que interesa, donde refiere que "....Reporte integral...se encontró que es una persona con poca tolerancia a la frustración, lo cual afecta su capacidad para mantener la calma, llevándolo a perder el control de sus impulsos, de ahí que ha tenido fallas en la toma de decisiones, un ejemplo... además admitió que entre los años 2006 a 2017 se ha presentado con resaca a sus labores; incluso un día tomó alcohol en horario laboral dentro de la institución..."

Aunado a lo anterior, a fojas 106 de autos, en la propia resolución administrativa se observa que la autoridad aduce que ".. el reporte de evaluación psicológico, el reporte de evaluación poligráfica y el reporte integral emitido por el personal con facultades legales del Centro de Evaluación... dichos reportes se advierten las consideraciones deliberativas y colegiadas, respaldadas por las pruebas psicológicas, papeles de trabajo, cuestionarios y formatos solventados directamente por el propio C.... por lo tanto goza de una presunción de validez y eficacia que no logró ser destruido por el dictamen pericial ofrecido por ... pues al contrastarlo ..."

Foja 107:

*"... se da por acreditado que el servidor público ... incurre en la causal de responsabilidad prevista en la fracción VII del Artículo 40....en relación directa con lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 41, ambos de la Ley Orgánica..."*

En la resolución impugnada, se refiere que no aprobó la evaluación poligráfica, psicológica e investigación socioeconómica. Así las cosas, es evidente que no se probó la existencia de prueba apta, suficiente y bastante que acredite plenamente que el demandante

obtuvo resultado no aprobatorio en las evaluaciones que le fueron practicadas, por lo que no se justifica cómo es que, del resultado de las diversas evaluaciones (poligráfica, psicológica y de investigación socioeconómica), la Directora del Centro de Evaluación de Control de Confianza, llegó a la conclusión señalada en el Reporte Final (cuya parte relativas fue transcrita por la autoridad demandada), que dicho sea de paso, no obra en el expediente. Lo que se corrobora de la certificación efectuada por la titular de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía demandada, quien hace constar que las copias certificadas con copia fiel y exacta de las originales, que obran en el expediente administrativo y que constan única y exclusivamente de **cuatrocientas veintiséis** fojas útiles; que fueron precisamente las que remitió la autoridad demandada junto con su escrito de contestación a la demanda; y entre las cuales no se tiene a la vista todas aquellas que en su caso, analizó la autoridad para llegar a determinar la remoción del cargo de perito, por responsabilidad administrativa y pérdida de requisitos para permanecer en el cargo de perito.

No es óbice para llegar a la anterior conclusión, el que el oficio de Informe de resultado, emitido por una autoridad del Centro de Evaluación, Control y Confianza, y que por lo tanto pueda tener el carácter de Instrumental Pública, en razón de que, si bien cuenta con la calidad mencionada, por sí sola, carece de la eficacia probatoria para acreditar los extremos que pretende la autoridad demandada. Considerando que la autoridad demandada tiene la carga de demostrar los hechos materia de enjuiciamiento en sede administrativa; lo que no ocurrió en este caso, dado que al exhibir la copia certificada del expediente integrado, no se observa documental alguna que sea apta, suficiente y bastante para corroborar que efectivamente la parte actora incurrió en responsabilidad administrativa en términos de su Ley Orgánica y que por ende dejó de reunir requisitos de permanencia, al no aprobar exámenes de control y confianza, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Fiscalía. No pasando inadvertido tampoco que, en dicha ley se considera que pérdida de requisito de permanencia al no aprobar el examen de control y confianza se encuentra inmersa en una responsabilidad administrativa, cuestión que a juicio de esta resolutora constituye una cuestión contradictoria; empero, sobre el tema ya existe pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la cual, solamente queda como una mera reflexión sin trascendencia en el fallo que se emite. Así como la circunstancia consistente que en la época en que se incoa el procedimiento administrativo ya existen nuevas reglas conforme el Sistema Estatal Anticorrupción, y diversas autoridades que deben intervenir, lo cual no fue atendido ni satisfecho por la autoridad demandada en el procedimiento que nos ocupa.

Aunado a ello, y como lo aduce la parte actora, la resolución impugnada carece de valoración adecuada y suficiente de pruebas, porque no especifica qué valor otorgó a cada uno de los documentos y diversos medios probatorios rendidos en el expediente administrativo, mayormente no valora y especifica cuál valor les corresponde o merecen las pruebas aportadas por el actor en dicho procedimiento, no indica fundamentación de la valoración ni especifica la eficacia de cada una de las pruebas aportadas, traducéndose en una resolución deficiente, que trasciende en la violación del derecho de defensa del actor.

No obsta para llegar a la anterior conclusión que en la resolución impugnada la autoridad refiera sustancialmente que de la evaluación

poligráfica, la evaluación psicológica y de investigación socioeconómica, la parte actora no aprobó los exámenes referidos, y que analice documentales que la suscrita no tiene a la vista, en donde la autoridad no satisfizo su carga, en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de exhibir las pruebas que justifiquen las consideraciones expuestas en la propia resolución.

No pasando inadvertido que este Juzgado no conoce ni tiene elementos convictivos a partir de los cuales advierta y corrobore que efectivamente la parte actora no aprobó dichos exámenes y evaluaciones.

Recordando que el procedimiento y la resolución que se analiza deriva de un procedimiento administrativo sancionador, donde la autoridad tiene la carga de la prueba, y prevalece en forma preponderante el principio de inocencia a favor del demandante.

En el caso, tampoco se conocen tratando de las evaluaciones, cuál fue la metodología ni el proceso para su desahogo, no pasando inadvertido que tampoco se tiene certeza sobre la certificación de la calibración del aparato utilizado, para llevar a cabo dicho examen en el caso del polígrafo.

Así las cosas, el oficio de remisión de resultado, no es suficiente para tener por plenamente acreditada la falta del requisito de permanencia que nos ocupa ni justificada la responsabilidad administrativa que se le atribuye, toda vez que se advierte que no fue precisamente la autoridad que signa el mismo quien practicó los exámenes de los cuales dice haber obtenido la información en que se sustentaron sus conclusiones, aunado a que no se exhibió ante este Juzgado Segundo el expediente soporte del referido oficio de Informe de resultado que contiene las evaluaciones cuya no aprobación se imputa al demandante y que la autoridad centro de evaluación remitió por separado con clasificación de reservado y confidencial, toda vez que conforme lo establece el artículo 11 del Reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, la Directora de dicho Centro, cuenta con personal encargado de tales evaluaciones:

**Artículo 11.-** El Centro de Control de Confianza estará a cargo de un Director, que será designado y removido libremente por el Secretario, y para el mejor desarrollo de sus atribuciones contará con las siguientes unidades administrativas:

I.- Subdirección de Evaluación, que contará con los Departamentos de:

- a) Evaluación Psicológica;
- b) Evaluación Médica y Toxicológica;
- c) Evaluación Poligráfica;
- d) Investigación Socioeconómica; y
- e) Archivo y Custodia;

II.- Subdirección de Certificación y Enlace, que contará con los Departamentos de:

- a) Enlace y Vinculación Institucional, y
- b) Certificación;

III.- Departamento de Asuntos Jurídicos;

IV.- Departamento de Sistemas e Informática; y

V.- Coordinación Administrativa.,

Es decir, no obran en autos todas y cada una de las probanzas en que consten las evaluaciones practicadas, los procesos y métodos aplicados y sus resultados, a efecto de sustentar debidamente la resolución impugnada, e incluso dar oportunidad a la Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza de defender los resultados que en su caso se hayan obtenido, conforme el artículo 15 del propio Reglamento:

Artículo 15.- La Dirección tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

XXIV.- Reafirmar y defender ante la autoridad competente los resultados de las Evaluaciones, así como justificar los métodos de análisis en que se hayan basado las mismas;

XXV.- Auxiliar a las unidades administrativas correspondientes del Centro de Control de Confianza, en el desahogo de las pruebas periciales relacionadas con las Evaluaciones practicadas y rendir los informes necesarios para dar certeza jurídica a las resoluciones administrativas que se determinen;

XXVI.- Asegurar la cadena de custodia de las muestras recabadas a los Evaluados, con motivo de la aplicación de los procesos de evaluación, de control de confianza y el de certificación respectivo;

XXVII.- Definir y controlar la observancia de los criterios de aceptación que deberán contener los dictámenes, para la elaboración y expedición del Certificado;

XXVIII.- Resguardar los expedientes que contengan las Evaluaciones, sus resultados y demás documentos o insumos de aquellas, y de los cuales se tenga la obligación de custodiar, hasta por un periodo de cinco años contados a partir de que se genere la información, así como, supervisar sus condiciones de seguridad;

XXIX.- Solicitar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los informes o documentación necesarios a efecto de dar cumplimiento al objeto del presente Reglamento;...

Aunado a lo anterior, y no obstante de tratarse de instrumental pública que, si bien cuenta con valor probatorio pleno, esta no tiene la eficacia probatoria que le otorga la autoridad demandada, pues no acreditan más que lo que esta contiene, es decir, una comunicación del resultado presuntamente obtenido y el resultado NO APROBATORIO que el funcionario atribuye, basándose en las evaluaciones practicadas al demandante, siendo que no se exhibió la copia certificada de dichas evaluaciones practicadas al hoy actor, los procesos aplicados o método científico utilizado, la justificación debida así como los resultados obtenidos, aún cuando el mismo actor se lo hizo ver en su declaración en sede administrativa.

Máxime que en ninguna disposición se establece que la Directora del Centro de Evaluación de Control y Confianza cuente con fe pública. Es sustento de lo anterior la siguiente tesis:

Época: Novena Época

Registro: 167892

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIX, Febrero de 2009

Materia(s): Penal

Tesis: XV.5o.1 P

Página: 1987

**PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL. NO ES UN DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE DEBA OTORGÁRSELE VALOR PROBATORIO PLENO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).**

Para que una prueba documental alcance el rango de pública, es condición esencial la intervención de un servidor público investido de facultades específicas de acuerdo con la ley, por ello es imprescindible que en el instrumento condigno, existan signos inequívocos de su autor, como por ejemplo la firma y el sello de autorización respectivo; lo anterior, porque estas exigencias tienen el propósito de generar certeza en la información que suministra respecto de algún hecho o circunstancia que tiene trascendencia en el mundo jurídico, de ahí que para reducir la posibilidad de engendrar dudas en torno a la autenticidad de la fuente de donde proviene la información de los hechos, el Juez debe constatar la calidad del servidor público que interviene en su elaboración. En esas condiciones y en atención a las máximas de la experiencia y la razón, se concluye que el parte informativo rendido por la policía judicial, que actúa bajo el mando del Ministerio Público, conforme a los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en rigor jurídico no es una prueba documental pública y, por lo tanto, la autoridad judicial al evaluarlo no debe



concederle pleno valor probatorio, de acuerdo con el numeral 215 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, pues si bien es cierto que el propósito de dicho informe es constatar la investigación de los hechos delictuosos, también lo es que los agentes de la policía no están investidos de fe pública; lo anterior es así, porque con fundamento en los artículos 37 y 45 del invocado código, los agentes de la policía judicial no tienen el carácter de autoridad facultada para dar fe, como el juzgador y el Ministerio Público, quienes en compañía de sus secretarios o de dos testigos de asistencia, elevan sus actuaciones a documentos públicos.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 7/2008. 12 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José David Cisneros Alcaraz. Secretario: Vladimir Véjar Gómez.

Época: Octava Época

Registro: 1013770

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011

Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo

Materia(s): Laboral

Tesis: 1170

Página: 1307

#### **PRUEBA DOCUMENTAL, ALCANCE DE LA**

Como la prueba documental es la constancia reveladora de un hecho determinado, lógicamente su alcance conviccional no puede ir más allá de lo que en ella se contiene, pues de ser así se desnaturalizaría la prueba de documentos.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 52, abril de 1992, página 49, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.T. J/26; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, página 264.

Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, página 496, tesis 552.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Se observa también que el citado oficio de Informe de Resultado, carece de medio de convicción alguno que le de soporte o sustento en relación con los diversos tipos de exámenes y evaluaciones practicadas al hoy demandante e información que se generó en dichos procesos, sin que se encuentre debidamente probado que la autoridad emisora del oficio, haya justificado tales conclusiones referidas para determinar que fue No Aprobado, tal como lo aduce el demandante en su escrito de demanda.

Conviene aclarar que, la no aprobación de los exámenes de confianza como requisito de permanencia y constitutiva de responsabilidad administrativa, no es una causal autónoma, ya que se encuentra íntimamente ligada a los procesos de evaluación, en tanto que, resultaría a todas luces contrario a derecho, así como a las garantías de audiencia y derecho de defensa, que cualquier autoridad, por el simple hecho de señalar en un documento que un servidor público no aprobó los exámenes de confianza, por tener el carácter de documento público, sea suficiente para tener por probada la falta administrativa, cuando se desconoce el resultado de cada una de las evaluaciones, los procesos que se llevaron a cabo, la metodología y resultados obtenidos o el sustento documental de lo afirmado en ellos.

Los procesos de evaluación se traducen así en los **medios** para identificar el posible incumplimiento de los requisitos de permanencia, mas no constituyen en sí mismos dicho incumplimiento. Ni tampoco

puede ser por sí mismo suficiente para tener por demostrada la responsabilidad administrativa de la parte actora.

Conforme lo anterior, es necesario que la autoridad demandada exponga en la propia resolución las consideraciones jurídicas tendientes generar certeza y seguridad jurídica, tanto al particular como a la sociedad, en cuanto a porqué le genera convicción que efectivamente el elemento policial dejó de reunir un requisito de permanencia; en el caso tal obligación no se encuentra satisfecha.

En este caso en particular, porque la autoridad no exhibió junto con su escrito de demanda las documentales públicas o medios de convicción aptos suficientes e idóneos que lo justifiquen.

El deber de la autoridad es exponer una motivación reforzada, sobre las razones por las que le genera convicción las evaluaciones practicadas al particular, y exponer una serie de argumentos que sustenten en forma convincente, que efectivamente el servidor público incurrió en responsabilidad administrativa por dejar de reunir un requisito de permanencia al no obtener calificación de aprobado en sus exámenes de evaluación y control de confianza.

Recordemos que la decisión es trascendente al particular, porque de ella, se genera un cambio en el proyecto de vida en su carácter de perito, la decisión administrativa repercute en el proyecto de vida de una persona que ha dedicado su vida al servicio de una institución de seguridad pública; de tal forma, que es menester que sea una decisión debidamente razonada y fundada, apoyada en medios de convicción aptos y suficientes, y en el debido razonamiento sobre el valor y eficacia que tales medios convictivos le generan; lo que en este caso no fue satisfecho a cabalidad y las cuales además en este caso, no se pueden corroborar o constatar ante la ausencia de pruebas idóneas como son los exámenes y las evaluaciones, sus resultados y los procesos y metodologías empleados.

Ahora bien, la carga probatoria de acreditar el incumplimiento del requisito de permanencia atribuido a un servidor público, en este caso a un miembro de una Institución Policial encargada además de la persecución de delitos y delincuentes, no corresponde al elemento sujeto a los procesos de evaluación y procedimiento administrativo sancionatorio, sino a la autoridad sancionadora, puesto que, tratándose de derecho sancionatorio, la parte actora cuenta con el principio de presunción de inocencia a su favor, en la forma y términos que de manera plena desarrolló nuestro máximo tribunal de justicia de la nación.

Este principio tiene como uno de sus efectos, la reversión de la carga probatoria hacia la autoridad sancionatoria, es decir, que el Perito no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la falta de un requisito de permanencia o falta administrativa en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia.

Es aplicable la siguiente tesis:

Época: Décima Época

Registro: 2006505

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III

Materia(s): Constitucional, Administrativa

**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO ACORDE CON ÉL.**

De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se advierte que los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consagran los principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

Amparo directo 37/2014 (cuaderno auxiliar 790/2013) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Del Toro y Asociados, S.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Abel Ascencio López.

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que las diversas 1a. XCIII/2013 (10a.), 1a. XCIV/2013 (10a.), 1a. XCV/2013 (10a.), 1a. XCVI/2013 (10a.) y 1a. XCVII/2013 (10a.), de rubros: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA APLICACIÓN DE ESTE DERECHO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEBE REALIZARSE CON LAS MODULACIONES NECESARIAS PARA SER COMPATIBLE CON EL CONTEXTO AL QUE SE PRETENDE APLICAR.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA." y

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, NO VULNERA ESTE DERECHO EN SUS VERTIENTES DE REGLA DE TRATAMIENTO, REGLA PROBATORIA Y ESTÁNDAR DE PRUEBA.", que fueron objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 200/2013, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 28 de enero de 2014, de la que derivó la tesis de título y subtítulo: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES."

Aunado a lo anterior, es de señalar que es de interés de la sociedad, conforme el artículo 1 en relación con el 21, ambos de la Constitución Nacional, que quien se encarga de los procedimientos de separación de los miembros y Agentes de seguridad pública así como **Peritos**, se allegue de todos los elementos convictivos necesarios para llegar a una conclusión, pues constituye un aspecto relevante que quien preste sus servicios como **perito**, cuente con el perfil necesario, y es por ello que la autoridad tiene el deber de allegarse de las pruebas idóneas para estar en condiciones de separar a los malos elementos o aquellos que no se ajusten al perfil necesario; así como de exponer las consideraciones basadas en las pruebas necesarias que lo llevan a concluir que dicho **elemento pericial** debe ser removido en forma definitiva de la corporación Fiscalía General; lo que en este caso no ocurrió.

Disipa cualquier duda la carga demostrativa que tiene la autoridad demandada, el hecho de que el artículo 21 constitucional penúltimo párrafo, establece que la seguridad pública "es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias" que la Constitución señala y que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

De donde se deduce la doble carga para la autoridad demandada de sujetarse al principio de legalidad, tanto en sus procedimientos como en los actos en que ella participa, de tal manera que solo en el caso de que formal y materialmente cumpla con su carga probatoria, remueva, separe o cese a los malos elementos o quienes no se ajusten al perfil; así como la garantía que representa para la sociedad que verdaderamente continúen prestando el servicio quienes sean buenos elementos que contribuyan a la preservación del orden social, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional.

Así las cosas, el artículo 58 del Reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza<sup>1</sup>, no puede estar por encima de los derechos de audiencia y defensa establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 14 y 16 Constitucionales, con las limitaciones de la reserva a que están obligadas las autoridades si se trata de información confidencial o clasificada como reservada a que se refiere el artículo 57 del propio Reglamento. Máxime que ninguna **Ley** autoriza a que, a través de un Reglamento, se establezca una prohibición con los alcances referidos en el citado artículo 58.

En las relatadas condiciones, esta resolutoria concluye que, como lo aduce el demandante, la autoridad demandada no acreditó que la resolución impugnada se sustenta en pruebas suficientes, aptas y

<sup>1</sup> Artículo 58.- La información solicitada por las Instituciones Policiales y/o el Órgano de Control Interno de aquellas; al Centro de Control de Confianza, referente a los procesos de evaluación, de control de confianza y de certificación de sus Miembros; únicamente se limitará al resultado de las mismas y en ningún caso se podrá informar sobre las técnicas y procedimientos utilizados por el Centro de Control de Confianza en la aplicación de las Evaluaciones.

bastantes para tener por plena y debidamente acreditada la falta del requisito de permanencia por no aprobar los exámenes psicológico, poligráfico y de investigación socioeconómica, aunado a la ausencia de un proceso completo de valoración de prueba dentro de la resolución impugnada, que determino considerar que incurrió en responsabilidad administrativa, **surtiéndose las causales de nulidad a que se refiere el artículo 83 fracciones II y IV de la Ley del Tribunal, debiéndose declarar la nulidad de la resolución impugnada** y condenarse a la autoridad demandada a dejarla sin efectos, con todas sus consecuencias legales.

De tal forma, que es procedente declarar y se declara la nulidad de la resolución impugnada materia del presente juicio, al actualizarse las causales de nulidad previstas en las fracciones II y IV de la Ley del Tribunal.

**V.- Efectos.-** Con fundamento en el artículo 84 de la Ley del Tribunal, se condena a la autoridad demandada a emitir una resolución dejando sin efectos la que se declara nula, con todas sus consecuencias legales y a girar los oficios a las autoridades correspondientes, haciendo de su conocimiento el contenido de este fallo a fin de que hagan las anotaciones correspondientes y para los demás efectos legales a que haya lugar, debiendo hacer lo propio la autoridad demandada dentro de sus registros. Para el caso de que la autoridad demandada haya hecho del conocimiento del **el Registro Nacional de Seguridad Pública la resolución declarada nula**, deberá a su vez hacerle saber el resultado de esta sentencia, para los efectos legales conducentes.

Asimismo, y **para el caso de decidir no reinstalar en el cargo al demandante como consecuencia jurídica de la nulidad que se decreta**, la autoridad demandada deberá ordenar se cubra al actor la indemnización por el equivalente a TRES MESES de las contraprestaciones que recibía por la prestación de sus servicios.

Igualmente se condena a la autoridad demandada como parte de de la salvaguarda del derecho afectado a favor de la parte actora, en términos del artículo 84, de la Ley del Tribunal, para que se le paguen las demás prestaciones económicas que dejó de recibir a partir de la fecha en que fue separado del cargo con motivo del procedimiento administrativo \*\*\*\*\*<sup>2</sup>, **ES DECIR A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, fecha en que se le notificó al actor la resolución administrativa que determinó la remoción definitiva del cargo como PERITO de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte**, hasta la fecha en que se le entregue la indemnización y demás prestaciones referidas, con entrega además, de un desglose pormenorizado de los conceptos y cantidades pagadas, en el que se incluya la evolución de tales percepciones por lo que corresponde al periodo a cubrir, y de los descuentos efectuados de tal manera que resulte de fácil comprensión la información que se proporcione a la parte actora; en su caso; debiendo girar los oficios pertinentes a las autoridades correspondientes (que se encuentren vinculadas con el cumplimiento de la sentencia, y quienes deberán actuar en forma pronta, objetiva, responsable, imparcial y respetuosa de los derechos humanos de la parte actora), a efecto de que realicen en forma ágil y oportuna los trámites legales y administrativos a que haya lugar para el pago ordenado, debiéndose incluir el día en que se materialice el pago.

En este mismo orden de ideas, y **en caso, se insiste de no reinstalar a la parte actora**, deberá cubrir al demandante, como parte de las prestaciones a que tiene derecho con motivo de la separación del



cargo declarada injustificada e ilegal, la suma equivalente a **veinte días de percepciones por cada año efectivamente laborado**, en los términos del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su interpretación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice:

Suprema Corte de Justicia de la Nación  
Registro digital: 2022229  
Instancia: Segunda Sala  
Décima Época  
Materias(s): Constitucional, Administrativa, Laboral  
Tesis: 2a./J. 46/2020 (10a.)  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 917  
Tipo: Jurisprudencia

**SEGURIDAD PÚBLICA. EL PAGO DE VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO QUE FORMA PARTE DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE COMPUTARSE Y EFECTUARSE DESDE LA FECHA EN QUE INICIÓ LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA HASTA AQUELLA EN QUE EL SERVIDOR PÚBLICO FUE SEPARADO INJUSTIFICADAMENTE DE SU CARGO.**

Hechos. Los Tribunales Colegiados contendientes al analizar cómo debe computarse y efectuarse el pago de veinte días de salario por cada año de servicio, que forma parte de la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno se realiza desde que inició la relación administrativa hasta que se decretó el cese o remoción ilegal del cargo, mientras que para otro se efectúa desde el inicio de la prestación del servicio hasta que se ejecute el pago en cumplimiento a la sentencia que declaró injustificada la separación.

Criterio jurídico. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el pago de veinte días por cada año de servicio que forma parte de la indemnización a que refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, debe computarse y pagarse desde el momento en que inició la relación administrativa hasta la fecha en que se separó injustificadamente al servidor público de su cargo, salvo que exista norma específica en el ordenamiento federal o local que amplíe tal periodo de pago.

Justificación. Lo anterior, toda vez que la porción aludida del artículo 123 constitucional al proscribir la reincorporación al servicio del elemento de seguridad pública separado y sólo otorgarle en caso de que la autoridad jurisdiccional declare ilegal el cese, el derecho a recibir una indemnización, implica que la relación administrativa de aquél con el Estado debe tenerse por terminada definitivamente a partir de la remoción, baja o separación, subsistiendo únicamente la posibilidad de que se revise la legalidad del cese a fin de que el servidor público sea o no indemnizado. En ese sentido, la sentencia firme que declara injustificada la separación o remoción del servidor público, únicamente conlleva el surgimiento del derecho a la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal. En consonancia, la fracción II del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo en la que se apoyó esta Sala para dar contenido al concepto de indemnización, refiere expresamente que tal indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, de lo que se deduce que el pago correspondiente se efectuará por los años efectivamente laborados, puesto que ello se desprende de la locución "servicios prestados", que refiere al tiempo en que el trabajador o servidor estuvo en activo.



Contradicción de tesis 77/2020. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Trigésimo Circuito y Primero en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 1 de julio de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; votó con reserva de criterio José Fernando Franco González Salas. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 504/2019, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 266/2019.

Tesis de jurisprudencia 46/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cinco de agosto de dos mil veinte.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 13 de octubre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. Época: Décima Época

El referido precepto constitucional deberá administrarse para efectos del pago de los **veinte días por año de servicio efectivamente prestado**, con lo establecido por el artículo 50 fracción II, de la Ley Federal de Trabajo, aplicada por analogía.

Debe entenderse, conforme el criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en términos del artículo 84, de la Ley del Tribunal, y los preceptos mencionados en los párrafos precedentes, que esa obligación a cargo de la autoridad demandada consistente en cubrir al actor el pago de los veinte días por cada año de servicio **efectivamente prestado** (es decir desde la fecha de su ingreso a la corporación policial en su carácter de \*\*\*\*\*<sup>5</sup> adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, ahora Fiscalía General de Estado de Baja California, fojas 187 de autos, nombramiento en copia certificada, **es decir a partir del día veintitrés de octubre de dos mil seis**, según se aprecia de la constancia obrante en copia certificada del expediente administrativo, hasta el momento en que fue removido del cargo como \*\*\*\*\*<sup>5</sup>, que en este caso, es la fecha en la que dejó materialmente de prestar el servicio, que es precisamente cuando se le notificó la resolución administrativa que determinó su remoción del cargo, es decir el uno de junio de dos mil veinte el cual deberá integrarse con todas las prestaciones que de manera habitual percibía el actor, como son sueldo, gratificaciones, percepciones y prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o prestación entregada durante la existencia de la relación administrativa que medio entre el demandante y la administración pública estatal; beneficio que se establece en atención a su colaboración y esfuerzo desarrollado durante los años de servicio.

Por lo expuesto y con fundamento en los Artículos 82, 83, fracción IV y 84 de la Ley del Tribunal, es de resolver y se resuelve, conforme los siguientes puntos:

#### RESOLUTIVOS:

**PRIMERO.-** Atento, a lo expuesto en el considerando **IV** de esta resolución y de conformidad con el artículo 83 fracciones II y IV de la Ley del Tribunal se declara la nulidad de la resolución impugnada, emitida en fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte por la Titular de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California, dentro del expediente número \*\*\*\*\*<sup>2</sup>, en contra de la parte actora \*\*\*\*\*<sup>1</sup>.

**SEGUNDO.-** En atención a lo expuesto en el considerando **V** de esta resolución y de conformidad con el artículo 84 de la Ley del Tribunal, se condena a la autoridad demandada, a emitir una resolución dejando sin efectos la que se declaró nula, y gire los oficios a las autoridades correspondientes y al Centro de Evaluación y Confianza del Estado de Baja California, haciendo de su conocimiento este fallo a fin de que hagan las anotaciones correspondientes y demás efectos legales a que haya lugar, debiendo hacer lo propio la autoridad demandada dentro de sus registros.

**TERCERO.-** En los términos del mismo considerando **V** de esta resolución, se condena a la mencionada autoridad, **para el caso de que opte por no reinstalar a la parte actora en el cargo de \*\*\*\*\*<sup>5</sup> dentro de la propia Fiscalía, en el cargo que venía desempeñando** a ordenar se cubra a la parte actora la **indemnización** por el equivalente a **TRES MESES** de las contraprestaciones que recibía por la prestación de sus servicios, y se le cubran además las prestaciones que dejó de recibir con motivo del procedimiento administrativo \*\*\*\*\*<sup>2</sup>, **ES DECIR A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, TOMANDO EN CUENTA QUE NO FUE SUSPENDIDO PREVENTIVAMENTE DEL CARGO**, (la resolución impugnada se le notificó el uno de junio de dos mil veinte) hasta la fecha en que se le entregue la indemnización y demás prestaciones antes referidas, con entrega además, de un desglose pormenorizado de los conceptos y cantidades pagadas y de los descuentos efectuados, en su caso; debiendo girar los oficios pertinentes a las autoridades correspondientes, a efecto de que realicen los trámites legales y administrativos a que haya lugar para el pago ordenado, debiéndose incluir el día en que se materialice el pago.

**CUARTO.-** En los términos del mismo considerando **V** de esta resolución, igualmente se condena a la autoridad demandada, **para el caso de que opte por no reinstalar a la parte actora en el cargo que venía desempeñando como Perito**, a ordenar se cubra al actor la suma equivalente a **VEINTE DÍAS DE PERCEPCIONES** que recibía en la fecha en que fue removido del cargo, por cada año de servicio efectivamente prestado, con entrega también de un desglose pormenorizado de los conceptos y cantidades pagadas y de los descuentos efectuados, en su caso; debiendo girar los oficios pertinentes a las autoridades correspondientes, a efecto de que realicen los trámites legales y administrativos a que haya lugar para el pago ordenado, debiéndose incluir el día en que se materialice el pago.

**Notifíquese:**

**A la parte actora, por boletín jurisdiccional, previo aviso electrónico.**

**A la autoridad demandada Titular de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Baja California, previo aviso electrónico.**

Así lo resolvió la Licenciada Flora Arguiles Robert, Magistrada de Sala, actuando en calidad de Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en Tijuana, de conformidad con lo dispuesto en el Resolutivo Cuarto del "Acuerdo del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California en virtud del cual se toman



diversas determinaciones con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California" dictado en sesión de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno; y firmó ante la presencia del Secretario de Acuerdos Licenciado Juan Carlos Mendívil Mendoza, quien da fe.

VERSIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>ELIMINADO: Nombre, con 7 en página 1, 10 y 22.</b></p> <p>Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.</p>                                  |
| 2 | <p><b>ELIMINADO: Expediente Administrativo, con 10 en página 1, 2, 4, 8, 10, 19 y 22.</b></p> <p>Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.</p> |
| 3 | <p><b>ELIMINADO: Número de oficio, con 7 en página 5, 6, 9, 10 y 11.</b></p> <p>Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.</p>                  |
| 4 | <p><b>ELIMINADO: Número de acreditación, con 1 en página 5.</b></p> <p>Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.</p>                           |
| 5 | <p><b>ELIMINADO: Cargo, con 4 en páginas 5, 21 y 22.</b></p> <p>Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.</p>                                  |
|   | <p><b>ELIMINADO: Cuaderno, con 3 en páginas 6 y 9.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p>Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.</p> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EL SUSCRITO, JUAN CARLOS MENDIVIL MENDOZA, SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR: -----

QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD, CORRESPONDE A UNA VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA MAGISTRADA TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO, DE FECHA **CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS**, RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO **896/2020 SS**, EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSIÓN QUE VA EN **DIECIOCHO** FOJAS ÚTILES. ----

LO ANTERIOR CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 80, 83, FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A **DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS**. DOY FE. ----

Jace.

